

Las tentaciones represivas de la política progresista.

Kevin Boss Nielsen

Hay algo que nos llamó la atención, que nos preocupó y que espero que a más de uno nos esté ocupando. Estoy hablando del evidente giro represivo que tomaron las políticas públicas en los últimos años en materia de “lucha contra la inseguridad”.

Desde la dialéctica bélica que ya nos va a aproximando a su contenido y solo por mencionar algunos -tal vez los más profundos- podemos citar: el constante proceso de *policización* exponencial, tanto de fuerzas provinciales como federales con cifras casi militares y modos de actuación similares, consistentes en el despliegue “al efecto” y la posterior ocupación territorial para la realización de labores “preventivas”. La instalación de complejos y abarcativos sistemas de video-vigilancia. La *discusión* sobre la presunta necesidad de nuevos tipos penales vagos, ambiguos y desproporcionados. La reforma de códigos de procedimientos que sacrifican garantías en pos de eficacia y rapidez –este último se convirtió en un aparente valor máximo aspirable del que es prudente sospechar-, y por último, pero no menos importante –y donde quiero detenerme- la nueva corriente *desfederalizatoria* del delito de pequeña tenencia con fines de comercialización y tenencia simple de estupefacientes (arts. 5 y 14 de la Ley 23.737) que están emprendiendo algunas Provincias, y otras están prestas a imitar. Esto es, el denominado “narcomenudeo”.

Se hace casi innecesario mencionar la inconveniencia, in-practicidad e injusticia de crear toda una infraestructura humana y material destinada a criminalizar consumidores, adictos o no, y pequeños vendedores de estupefacientes. No seré yo quien lo diga ya que huelgan estudios en materia criminológica que desde hace tiempo vienen demostrando los efectos negativos de las políticas punitivas en materia de drogas. Pero aun desconociendo lo anterior a nivel académico, hay algo que se hace evidente hasta para el menos perspicaz, y es que el narcomenudeo persigue exactamente lo que su nombre indica, el menudeo. Definido este último según la Real Academia Española como “acción de menudear” y este último verbo, como “repetir algo con *poca entidad*.” Todo indica lo mismo, y es lo que se hace evidente. Es un traje hecho a medida para los sectores sociales vulnerables. No para *carteles*, no para *mafias*, no para jefes ni organizaciones transnacionales, y mucho menos para los agentes financieros y técnicos que constituyen un eslabón imprescindible en la cadena delictiva, sino para perseguir la economía de subsistencia de los barrios marginales, y aun peor, para simples consumidores, algunos de ellos inclusive enfermos. Y para confirmar esto hay que simplemente apartarse del análisis de la ley para girar la mirada a las prácticas. Allanamientos masivos, circunscriptos a barrios populares ponen una y otra vez de manifiesta la ridícula relación entre el despliegue de recursos y sus resultados. Cantidades insignificantes, que las más de las veces no pasan de una o dos plantas de cannabis sativa, pequeños envoltorios, revistas de cultura cannábica, lámparas, “bochines”, y por supuesto la nota de color del “dinero en efectivo” y “armas blancas” –ambos elementos que todos tenemos en nuestras casas- son presentados como golpes al narcotráfico y desbaratamiento de laboratorios por el aparato de la noticia espectáculo. Muy lejos quedó “Arriola” y el exhorto jurisprudencial a replantearse vetustos paradigmas.

Ahora bien, esto no es nada nuevo, lo que llama la atención y me lleva a hacer esta breve reflexión es lo siguiente. Estas políticas están surgiendo de determinados actores que venían teniendo una marcada línea de evitación sobre ciertos modelos de obrar - provenientes de grupos bien identificados - pero que sin embargo en los últimos años vemos como para deleite de los últimos están cayendo en una vieja trampa, y no en cualquiera sino tal vez en la peor de todas. La de volverse progresivamente paradójales. Es decir, ejercer políticas redistributivas y de justicia social, pero al mismo tiempo adoptar moldes represivos que desgastan y detienen los paulatinos progresos en términos de inclusión. Lo que está generando que se produce un verdadero *des-dibujamiento* de su identidad, lográndose así una mimesis que los hace peligrosamente similares a sus antagonistas.

Los sectores neo-liberales con su gran aparato mediático se regodean cuando esto sucede. El error del político progresista es “comprar el buzón” del caos y el desorden –lejos de la estadística- que siempre se achacó a los estados de bienestar, por oposición al “orden” del que hicieron gala las dictaduras neoliberales, y que siguen proclamando como slogan de campaña los actores democráticos del mismo modelo. Es esa la más insidiosa arma de la política de mercado, que obedece a un fenómeno mundial. Podemos ver un cabal ejemplo de lo anterior en el Reino Unido, donde el partido laborista –de centroizquierda- sancionó más leyes represivas que su rival conservador.

Esto se debe a que el falso talón de Aquiles del desorden y el aumento de criminalidad hace que se produzca una reacción presuntamente lógica, aunque obviando que nada tiene de lógica la estrategia corporativa. El adelantamiento a las debilidades.

Los políticos progresistas reaccionan anticipadamente. “Sabemos que por acá van a atacar, así que no vamos a darle ni un ápice de tela para cortar”, cayendo en la falsa concepción de que a la batalla contra los modelos excluyentes se la gana cediendo. Lo cierto es que no es así. Cuando el político cede al programa del mercado, el mismo redobla la apuesta.

Esto pasa ya que si bien se parte de un diagnóstico más o menos certero, consistente en determinados niveles de violencia social, y al surgimiento de nuevos eslabones delictivos, la medicina en cambio es totalmente inocua y hasta funcional, recurrir al trilladísimo y místico poder punitivo que siempre estuvo a la saga de las problemáticas sociales sin poder resolver absolutamente ninguna. Por ende, lejos de solucionarse el problema, se acrecienta, y se re-expone como otro fracaso propio del partido gobernante, sin nunca decir que es culpa del método, exigiendo con vehemencia profundización del mismo hasta llegar al punto de introducir al político incauto en un verdadero círculo vicioso al cual es muy difícil de escapar ileso.

La agenda de los medios masivos de comunicación, consiste en vender un simple pero inescindible combo, compuesto por tres elementos. Un diagnóstico real pero exagerado de la situación, recurriendo a los innúmeros y sobre-estudiados mecanismos de manipulación de la opinión pública. Un pronóstico distópico del futuro próximo en el caso de proseguir el “status quo”. Y un “tratamiento” -y he aquí el mayor de los problemas- totalmente desprendido de los enfoques de las disciplinas criminológicas contemporáneas; recurrir a la violencia contraofensiva, a la mano dura y a la represión indiscriminada -siendo este último adjetivo nada más que figurativo, ya que por los altos niveles de selectividad podemos hablar sin temor a equivocarnos de una represión totalmente *discriminada*-.

Así como en otros tiempos, el error de los sectores de centro-izquierda consistió en omitir ciertas problemáticas concretas del ejido social y “mirar para otro lado” sobre el fenómeno de la criminalidad para evitar ser funcionales al esquema represivo, hoy el error es ser

completamente permeables a el *demarcamiento* de la agenda en cuestiones de política criminal.

Hay quienes recurren la violencia estatal por ideología autoritaria, hay quienes lo hacen por oportunismo electoral -en este último tranco podemos encontrar un pintoresco personaje que pretende ocupar el sillón Rivadaviano a puro discurso penal, reduciendo el total de las políticas públicas a la discusión de si el adolescente que hurta merece mayor o menor pena útil-. Sin embargo, hay otros que lo hacen por desconcierto, y ese es el sector que más preocupa, por la ausencia de deliberada intención, o para decirlo en términos penales, por la ausencia de dolo. De esta forma, siguiendo el esquema figurativo de la dogmática penal, y con el consiguiente guiño corporativo del cual me hago cargo, podríamos decir sobre primero que estamos en presencia de dolo directo, en cuanto al segundo podemos atribuirle una suerte de dolo indirecto de consecuencias necesarias y al último de ellos un obrar meramente culposo, más precisamente imperito, por falta de conocimiento en la manera eficiente de combatir la criminalidad y al mismo tiempo afrontar los discursos demagógicos de la mano dura.

Dejando de lado la pequeña digresión técnica, lo cierto es que para escapar al espiral de violencia que consume al condescendiente, y ya fracasado el intento de desviar el eje de atención sobre la cuestión criminal, la única alternativa posible para quien quiera afrontar sinceramente la problemática delictiva, y al mismo tiempo sostener el proceso de inclusión de los sectores históricamente relegados –ambas políticas necesariamente ligadas- es la racional, es decir, aceptar que tenemos ciertos problemas en cuanto al incremento de la violencia social e intrafamiliar, el aumento del consumo de sustancias -primordialmente alcohol-, el surgimiento y la consolidación de organizaciones criminales complejas –con necesaria connivencia policial- entre otros. Pero al mismo tiempo denunciar que a diferencia de lo que sugiere, las principales víctimas son los propios sectores excluidos –tal como lo reflejan las estadísticas de homicidios dolosos en nuestra región- y evidenciar abiertamente que las recetas represivas propuestas son totalmente correlacionales a las tasas de inseguridad, mostrando su estrepitoso y bien documentado fracaso a nivel mundial.

Es imprescindible para el político que se precie de tal hacer saber a la ciudadanía que no hay plan posible, al menos si se quiere obtener remedios relativamente eficaces, que no incluya el dejar de lado el placebo del garrote y el cortoplacismo. Esto es, generar la legitimidad social para abordar un plan sistémico y programático, dando lugar tanto en el debate público como en los equipos técnicos a los únicos que pueden dar cuenta con relativa seriedad de los “*que’s*”, “*cómo’s*” y “*para que’s*”. Es decir, a los especialistas. Estoy hablando de los criminólogos, ese aparentemente olvidado ámbito que incluye a sociólogos, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, y en definitiva todos los que se encargan de estudiar seria y sistemáticamente las causas y factores relacionados al delito. Ya que la criminología es entendida actualmente, no como una ciencia autónoma, sino como un conjunto inter-relacionados de disciplinas y saberes destinado a estudiar la conducta desviada y sus diferentes manifestaciones y reacciones.

Porque es solo a través de la ciencia que se puede contemplar el fenómeno tal cual es, y no como la alucinación imperante nos quiere hacer creer, ilusión que se produce por el constante bombardeo de malintencionados y convencidos.

El político progresista debe dar el debate abierto, instar al pensamiento crítico, mostrar fuentes, referencias, derribar el andamiaje manipulador de la falsa criminología mediática, confrontar abiertamente a los propagandistas de la represión, a los creadores de miedos, *matapibes*,

borceguineros, sembrabasuras y marcafronteras que pululan por nuestros rojos noticiosos. Al mismo tiempo que rodearse de los que saben y hacerlo saber. Eso tomarse en serio la política criminal y no adoptar una política criminal, en la peor de sus acepciones.

La mercantilización de la sociedad, el consumismo que arroja a nuestros pibes a tener anhelos de consumo vacuos, la segmentación, la división cultural que nos arroja el aparato propagandístico –que irónicamente dice querer combatir la delincuencia-, sembrando nada más que prejuicios clasistas. La incidencia criminógena de las cárceles, *pobretecas* reforzadoras de dinámicas interpersonales violentas y naturales reincidencias ante las cuales todavía tenemos el descaro de sorprendernos. La aun presente falta de oportunidades en los niveles bajos de las planas de ejecución, simple y tosca mano de obra de opulentos almidonados a los que se los tilda en los medios de genios criminales con claro contenido apologético, entre tantas otras manifestaciones constituyen todo un bagaje de dobles estándares e incoherencias que son necesarias de visibilizar, en el propio seno del aparato, pero requieren coraje y decisión política. No es para ansiosos, ningún cambio magno lo es, de ahí que la costumbre del cortoplacismo sea otro vicio al cual el político bienintencionado tiene que afrontar y reclamar la plena toma de conciencia. El costo político es un fantasma que parte de la subestimación del electorado, porque el pueblo piensa, y si no lo hace, está sediento de hacerlo, solo necesita que alguien rasque un poco para ver que detrás de ciertas cascaras no hay más que un gran vacío.

Interpelar a mentirosos, cortoplacistas y demagogos requiere de coraje y decisión, pero lo cierto es que, insisto, la historia nos demuestra que el costo de ceder siempre fue mayor.

No es fácil, no es para tibios, pero el pueblo y la patria se los demandan.